

Las Mariposas de Buenaventura, Colombia: Sostienen la vida, construyen la paz

Bibiana Peñaranda con la colaboración de David J. Sulewski¹
Universidad Central de Nicaragua y Universidad de Massachusetts, Boston

En Buenaventura, Colombia, ciudad portuaria asolada por la violencia, la Red Solidaria Contra las Violencias de Género: Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro constituye un colectivo de mujeres que ponen en riesgo sus propias vidas para ayudar a las víctimas de la violencia de género. Este ensayo personal escrito desde la perspectiva de una integrante de la red sostiene que construir la paz en medio del conflicto requiere que las mujeres asuman prácticas de autoprotección como parte integral de sus estrategias de montar resistencia pacífica, avanzar en la protección de las víctimas de violencia y desarraigar las causas de la violencia. Esta reflexión sobre los esfuerzos de autoprotección liderados por la comunidad local incluye una discusión sobre el apoyo de la comunidad internacional y la responsabilidad del Estado.

Palabras Clave: Buenaventura, Mariposas, Protección, Resistencia no violenta, violencia sexual

Introducción

En Buenaventura, ciudad portuaria ubicada en la Costa Pacífica de Colombia y asolada por la violencia, valientes mujeres organizadas ponen en riesgo sus propias vidas para ayudar a las víctimas del desplazamiento y de la violencia sexual basada en el género. Este colectivo de mujeres afrodescendientes, indígenas y mestizas se llama “Red Solidaria Contra las Violencias de Género: Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro”, o simplemente, “las Mariposas”. Las integrantes relatan que en algunas partes de África, las mariposas representan el alma y el ciclo de la vida humana, y como las mariposas, ellas han experimentado su propia metamorfosis. Muchas han sido desplazadas a la fuerza debido al conflicto armado en Colombia o cuentan con familiares asesinados o desaparecidos. Muchas también han sido víctimas de la violencia sexual y la violencia doméstica, exacerbadas en el contexto de guerra. Esta experiencia las empuja a proseguir con su labor, a pesar de los riesgos, para transformarse de víctimas en sujetos sociales con derechos.

¹ Bibiana Peñaranda (bibiparati@gmail.com) está persiguiendo su doctorado a la Universidad Central de Nicaragua; David Sulewski (David.Sulewski001@umb.edu) está persiguiendo su doctorado en la seguridad humana y gobernanza global en la Universidad de Massachusetts, Boston

Construir la paz en medio del conflicto requiere que las mujeres asuman prácticas de autoprotección como parte integral de sus estrategias de montar la resistencia pacífica, avanzar en la protección de las víctimas de violencia y desarraigar las causas de la violencia. Como integrante de las Mariposas, yo (Bibiana) quisiera abordar el tema de la autoprotección en el contexto de Buenaventura y mostrar que nuestra red solidaria ha comprobado que las comunidades locales pueden ser las principales proveedoras de protección y organizarse de maneras que ayudan a las víctimas del conflicto armado. La comunidad internacional también asume un papel sustancial al apoyar nuestros esfuerzos de protección, tal como es el caso en Buenaventura. Si bien es necesario ser líderes en nuestra propia protección, participamos activamente en espacios institucionales para fortalecer y responsabilizar al Estado, con el fin de que los responsables formales de la protección cumplan con sus responsabilidades.

Una situación grave en Buenaventura

Buenaventura cuenta con una de las mayores tasas de violencia y desplazamiento debido a la escalada del conflicto entre grupos armados ilegales. A partir de agosto 2014 en el municipio de Buenaventura, 166.704 individuos de una población total de 392.054 fueron víctimas del desplazamiento—es decir, 42,5% de la población—y 187.542 fueron víctimas del conflicto armado (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, citada en: Carillo 2014).

Por su ubicación en la Costa Pacífica, una región de riquezas naturales y mucha potencialidad por economías extractivas, la ciudad-puerto atrae intereses para la inversión nacional y transnacional especialmente en megaproyectos. El 60 por ciento de la mercancía que entra o sale del país pasa por Buenaventura, el puerto principal (CNMH 2015). Sin embargo, la ciudad padece de niveles de pobreza y desempleo excepcionalmente altos (Schoening 2014). A partir de diciembre 2014, el 63% de la población está desempleada y el 66,3% vive por debajo de la línea de pobreza (Dirección Nacional de Estadística; Departamento Nacional de Planeación, citados en Carillo 2014).

Por su posición estratégica y actividad comercial, Buenaventura también atrae actores armados ilegales que compiten por el control del territorio. En el casco urbano los poderosos grupos sucesores de paramilitares—conocidos como la Empresa y los Urabeños (ahora llamados el Grupo Armado/Clan del Golfo)—causan la mayoría de los abusos de derechos humanos (Carillo 2014). Tienen interés particular en el territorio propicio para el tráfico de narcóticos y armas, el mantenimiento de los carteles que controlan buena parte de los alimentos y el saqueo de los recursos naturales cuidados ancestralmente por las comunidades negras e indígenas del Pacífico Colombiano. Debido a esta dinámica tripartita de exclusión de la población, inclusión de los potenciales económicos y presencia de grupos armados ilegales existe el dicho común de que “Buenaventura es un puerto sin comunidad” (CNMH 2015).

Violencia sexual y sus consecuencias

Inmersa en los intereses geoeconómicos por el control territorial existe una violencia creada por el racismo estructural-cotidiano, exacerbada bajo el sistema patriarcal, sexista, clasista, capitalista y homofóbico. Buenaventura es uno de los municipios con mayor prevalencia de violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado, con un 30,6%. Desagregar el dato estadístico por etnia, edad y estrato socioeconómico revela que las más expuestas a ser víctimas de la violencia sexual son las mujeres negras (89%), en el rango de edad de 35 a 44 años (38,1%), del estrato socioeconómico bajo-bajo (78,8%), vis-a-vis mujeres de otro origen étnico (mestizo 8%, blanco 3%), de otros rangos de edad (de 15 a 24 años 25,8%, de 25 a 34 años 36,1%) y de otros estratos socioeconómicos (bajo: 10,6%, medio bajo: 10,6%) (Campañas Violaciones 2017). Esta información confirma que las mujeres víctimas viven la triple discriminación: primero, por vivir en una zona periférica donde operan actores armados ilegales y las instituciones del Estado son débiles; segundo, por la falta de garantías para ejercer sus derechos; tercero, por su pertenencia étnica, socioeconómica o identidad sexual.

Surge además la legitimación del régimen del terror como un elemento domesticador derivado del sistema esclavista negrero colonial. Se busca la normalización de las violencias como un arma de guerra que pretende domesticar las conductas, demarcar los territorios y apropiarse la fuerza laboral de la población para trabajos ilícitos, como el transporte encubierto de armas. A las niñas y mujeres les imponen la disponibilidad sexual o las forman igualmente como cantadoras de zonas e informantes infiltradas, como novias o amantes obligadas. Además, a través de la relación de pareja sus compañeros sentimentales las involucran contándoles sus acciones delictivas, situación que las convierte en cómplices de grandes secretos. Lo anterior las convierte en “sapas” [soplonas], argumento perfecto para asesinarlas, desaparecerlas o mostrarlas como las “brinconcitas” [putas] de la zona. Utilizan también el escarnio público en aplicarles pegante en el cabello y desnudar a mujeres en la vía pública si no aceptan sus propuestas sexuales.

Estas expresiones del conflicto tienden a perpetuarse todavía más cuando la sociedad naturaliza las violencias al considerarlas como un simple conflicto de pareja, o lo que mal llamamos “un problema de sábanas”, violencia intrafamiliar, o lesiones personales. A causa de la cultura de intimidación y miedo—la “ley de silencio”—que los grupos armados imponen como una estrategia aterradoramente de control, existe también un espantoso subregistro de las violaciones y feminicidios.

Los actores armados buscan la imposición de normas cotidianas que destruyan las prácticas culturales ancestrales y se apropiaran del territorio, de los espacios familiares y comunitarios y del imaginario colectivo mediante sus prácticas crueles. En la guerra que vivimos en Buenaventura, usan, gozan y disponen del cuerpo de las mujeres, lo que marca una tendencia hacia la esclavitud y la explotación sexual.

Una respuesta desde la base: acciones y prácticas

En este ambiente nacen las Mariposas como una estrategia colectiva comunitaria y pacífica de mujeres que hace una lectura de los derechos humanos con ojos diversos. Somos una red de “patidescalzas” aportando herramientas para la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres en Buenaventura. Brindamos orientación, asesoría y acompañamiento personalizado a las víctimas de abusos y delitos. A pie o en autobús nos movemos con cautela por los barrios más peligrosos para ayudar a las mujeres a acceder a atención médica y psicológica, así como acompañamos a quienes se deciden a denunciar los delitos. Mediante talleres periódicos también compartimos conocimientos prácticos que les permiten reconocer que son valiosas, desnaturalizar las violencias y conocer sus derechos. Ante la impunidad ejercemos presión sobre las autoridades locales para defender los derechos de las mujeres. Pese a atraer la atención de los grupos armados, organizamos protestas, y marchamos por las calles de Buenaventura reclamando a gritos ‘¡No más abusos contra las mujeres!’, decididas a derribar el muro de miedo y el silencio. Desde nuestra creación en el año 2010 hemos ayudado a más de mil mujeres y sus familias. En reconocimiento de nuestra defensa de los derechos de las mujeres recibimos el Premio Nansen para los Refugiados en 2014.

Es importante reconocer cuáles son los detonantes de los conflictos en Buenaventura y cuáles son las estrategias colectivas que fortalecen los procesos organizativos para que visibilicen las injusticias a la vez que protejan la vida y sanen colectivamente. Es fundamental la manera de abordar los conflictos y extirpar de raíz la naturalización de las violencias. En medio de escenarios violentos sabemos arar, sembrar y cosechar acciones poderosas para construir la paz, la igualdad y la equidad en las que la voz de las mujeres, aunque hayan sido excombatientes, sea escuchada y participe en los espacios de decisión.

La recuperación de las prácticas tradicionales de sanación y solidaridad vecinal es primordial cuando los grupos armados buscan dividirnos. La consolidación de los lazos de hermandad nos une y apoya los círculos de saberes en los cuales las mujeres tienen la confianza de compartir sus experiencias vividas. Estos son espacios donde se conversa sobre los derechos humanos de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos, independientemente de su etnia, raza, religión, orientación sexual, nivel educativo y situación socioeconómica. De esta manera también incorporamos plenamente a las mujeres más vulnerables que están viviendo hechos victimizantes.

Somos las proveedoras mismas de nuestra autoprotección. Frente a las amenazas y dinámicas cambiantes construimos medidas de autoprotección arraigadas en nuestras prácticas culturales ancestrales que han sido tradicionalmente expresiones de resistencia y autoprotección. Nuestro poder colectivo viene del “comadreo”, una práctica tradicional espiritual de herencia ancestral milenaria llena de afecto, protección, comprensión y soporte afectivo; es una relación de parentesco indisoluble y resistente que se establece en las comunidades donde el respeto, la colaboración, el acompañamiento y la confidencialidad son esenciales. El comadreo es una estrategia de autoprotección y de protección a las mujeres. A través del comadreo nos protegemos mutuamente para poder sobrevivir amorosamente en medio del conflicto. Vamos donde las mujeres para prevenir la violencia y sensibilizarlas. ¿Cómo lo hacemos? Tocamos las puertas, hablamos tomando café, compartimos nuestras historias personales, incluso llegamos a decirles un par de chistes. Poco a poco, con respeto,

comenzamos a construir la confianza. Mientras que los grupos armados ilegales emplean una estrategia de violencia contra las mujeres como una forma de control, nosotras usamos una estrategia de amor para construir una red solidaria de comadres.

¿Son suficientes nuestras estrategias? Somos las primeras en reconocer que no tenemos ninguna garantía de protección. Existe el riesgo cuando acompañamos a las mujeres a denunciar directamente a la Fiscalía y no sabemos cómo van a reaccionar los violentadores. A pesar de los riesgos, seguimos en la lucha diciendo: “Si nos matan calladas, nos van a matar hablando”.

Apoyo desde la comunidad internacional

Bien que la respuesta debe ser local, la comunidad internacional ha jugado un papel importante al proteger y fortalecer nuestros procesos comunitarios de autoprotección. En particular, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuyo mandato es brindar protección y asistencia, ha apoyado nuestros esfuerzos. Antes de intervenir, ACNUR había implementado la estrategia de identificar y evaluar (con un enfoque de género) los procesos comunitarios ya existentes en Buenaventura. ACNUR desarrolló esta estrategia al nivel nacional al largo de los años, apoyando a comunidades afectadas por el conflicto en lugares donde el acceso era muy difícil.

El apoyo más básico de parte de ACNUR ha sido el acompañamiento. A veces los trabajadores de ACNUR nos acompañan cuando entramos en los barrios “calientes” a realizar nuestras actividades. Como dice Sulma Rodríguez, Oficial Nacional de Protección de ACNUR: “Tenemos un mandato de protección por presencia. Es una manera de respaldar el proceso y sí creemos que eso genera protección y que es una medida que minimiza riesgos” (Rodríguez 2016). Los funcionarios de ACNUR están en constante comunicación con nosotras monitoreando la situación y a veces el acceso en algunos barrios ha sido difícil. Escuchan nuestro análisis, como indica Rodríguez:

Si la comunidad nos dice, ‘No vengán porque si a mí me ven hablando con ustedes, me genera un riesgo’ [Si] nuestra presencia puede generar riesgo para las comunidades, entonces no entramos . . . para evitar acciones con daño. Entonces, todo eso requiere un proceso de acompañamiento permanente.

Si bien es necesario apoyar los esfuerzos de autoprotección liderados por la comunidad, también es importante establecer métodos para fortalecer y responsabilizar al Estado para que los responsables formales de la protección no eludan sus responsabilidades. Para tal fin, ACNUR apoyó la creación de la Mesa Intersectorial de Prevención y Respuesta frente a las Violencias de Género y para la Salud Mental, en la que participan instituciones del Ministerio Público, organismos internacionales, organizaciones sociales de base e instituciones estatales—40 entidades en total. La Mesa surge como un espacio de coordinación humanitaria para evitar la duplicación involuntaria de esfuerzos y tiene como propósito desnaturalizar las violencias, crear rutas de atención seguras y de rápida acción dentro y fuera de las entidades mencionadas, recuperar la credibilidad en las distintas

instituciones, mantener un lenguaje común en las rutas de protección y salvaguardar la vida de las personas que sufren violencias de género.

El espacio intersectorial busca sensibilizar y brindar herramientas de prevención, atención, protección y orientación en la ruta de atención a las instituciones y organizaciones que atienden las violencias de género de acuerdo a la Ley 1257 de 2008, a la Ley 1448 y otras leyes conexas, así como al auto 092 y a la sentencia C355. Con estrategias conjuntas de trabajo y análisis de datos, propone además visibilizar los diversos hechos victimizantes que sufren las mujeres, niñas, niños y la población LGBT en Buenaventura.

Aunque se ha avanzado en crear y fortalecer la ruta intersectorial, un lenguaje común y unas herramientas intersectoriales, todavía se evidencian falencias en la Mesa, puesto que falta compromiso por parte de muchas instituciones, como los jueces, quienes no asisten a la Mesa, tampoco agilizan procesos por desconocer rutas y la importancia de los casos. Los mecanismos de protección están ausentes, puesto que las entidades prestadoras de salud no responden de acuerdo a las exigencias de la ley. Es decir, que en cuanto a la protección verdadera de las mujeres, todavía estamos en pañales en el espacio intersectorial.

Ahora bien, por otro lado nos damos cuenta de que el concepto de seguridad y protección que tienen el Estado y la fuerza pública es muy distinto del concepto que tenemos en las comunidades. Esto se convierte en una dificultad, porque las estrategias de protección que usan son diferentes a las nuestras y a veces causan daño, nos exponen ante los grupos armados y ante ellos mismos, y una seguridad que expone a la comunidad no nos sirve. Necesitamos la seguridad alimentaria, la seguridad territorial en la que se pueda sembrar y recoger el pan como antes; necesitamos la seguridad para ir al mar o al río a coger nuestro alimento; necesitamos la seguridad de la educación, del empleo digno, la seguridad de permanecer en el territorio con nuestras expresiones tradicionales culturales y folclóricas; necesitamos la seguridad sin violencia para las mujeres, niñas y niños. Nuestro compromiso es incidir en las relaciones con las autoridades locales a través de este concepto. Las organizaciones de carácter humanitario sí se acercan más a nosotras con su concepto de protección, que tiene como base los derechos humanos, pero son limitadas porque no pueden incidir tan contundente y políticamente a favor de la protección como quisiéramos.

Justicia para las mujeres requiere que los aparatos de justicia se conviertan en espacios protectores en nuestras localidades y que trabajen articuladamente con nosotras a través del cumplimiento de las leyes. Necesitamos que el Estado reconozca y respete los derechos de las mujeres y que proteja sus vidas. Una sociedad con violencia hacia nosotras es inaceptable y en Colombia no habrá paz si las mujeres negras, indígenas y mestizas no están incluidas.

Conclusión

Tenemos nuestras estrategias de protección, pero hay que fortalecerlas desde nuestra perspectiva, no desde la mirada de afuera, pues somos nosotras, las que vivimos en el territorio, las

que mejor conocemos nuestras realidades. Hemos vivido la violencia, pero seguimos siendo sujetos sociales de derecho. A veces las y los funcionarios llegan con una mentalidad de salvarnos en vez de preguntarnos en qué podemos trabajar para construir un proyecto conjuntamente. Entonces, hay que comenzar por trabajar la mentalidad racista, victimizante y la mirada hacia nosotras como pobres apolíticas, sin nuestra propia autonomía y capacidad para avanzar en la protección de nosotras mismas.

Aunque la respuesta debe ser local, el apoyo de la comunidad internacional, tal como lo brinda ACNUR, fortalece nuestros procesos comunitarios de autoprotección. Nuestra participación en la Mesa Intersectorial es una manera para incidir para lograr la protección que queremos. Siguiendo un camino de colaboración mutua que fortalece nuestras estrategias de autoprotección y protección a las mujeres, podemos lograr una Buenaventura sin racismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, clasismo, y sin todo lo que produce violencias hacia las mujeres.

Bibliografía

Campañas Violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra. 2017. *Violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano 2010-2015. Resumen ejecutivo para el municipio de Buenaventura*. Bogotá: Campañas Violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra.

Carillo, Á 2014 *Buenaventura, Colombia: Realidades brutales*. Bogotá: Consejo Noruego para Refugiados. <http://www.acnur.org>.

CNMH (Centro Nacional de Memoria Histórica) 2015 *Buenaventura: Un puerto sin comunidad*. Bogotá: CNMH. <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2015-1/Buenaventura>.

Noble, R 2017 *Double Jeopardy: Violence against Women and Economic Inequality*. London: ActionAid. http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/actionaid_double_jeopardy_decent_work_violence_against_women.pdf.

Rodríguez, S 2016 Entrevista. 10 marzo.

Schoening, M 2014 *La crisis en Buenaventura: Desapariciones, desmembramientos y desplazamiento en el principal puerto de Colombia en el Pacífico*. Nueva York: Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/colombia0314spwebwcover.pdf>.

Timo, P 2013 Development at the Cost of Violations: The Impact of Mega-Projects on Human Rights in Brazil. *SUR International Journal on Human Rights*, 10(18): 137-158. DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2401195>.